

Planeando la justicia alimentaria

Un esfuerzo por incluir la equidad en los planes generales de ciudades y condados a través de la ley del Senado (SB) 1000 de California.

Por Katherine Fallon, MCP, Charisma Acey, PhD y Susana Matias, PhD



Índice

- 2 Introducción
- 3 Justicia medioambiental y alimentaria
- 3 ¿Qué es la SB 1000?
- 4 Seguimiento de la SB 1000
- 7 Estudios de casos: Gilroy y Richmond
- 9 Recomendaciones sobre la política
- 10 Conclusión
- 11 Notas

Reconocimientos

Este reporte es parte de un proyecto de investigación desarrollado por Charisma Acey, profesora asociada de planificación municipal y regional de la Facultad de Diseño Medioambiental y Susana Matías, especialista de Extensión Cooperativa en el Departamento de Ciencias Nutricionales y Toxicología de UC Berkeley. Acey y Matías son directoras de facultad del *Berkeley Food Institute* (Instituto de Alimentos de Berkeley) o BFI, por sus siglas en inglés. Con el apoyo del BFI, Katherine Fallon, estudiante de investigación postgrado en este proyecto, escribió una versión del reporte en cumplimiento parcial para una maestría en planeación municipal, la cual obtuvo en mayo del 2023. BFI publicó este reporte en preparación a una serie de eventos comunitarios en torno a la SB 1000 organizado por Nathalie A. Muñoz, líder del Programa de Participación Comunitaria y Sakeenah Shabazz, directora de política. Austin Price, coordinador de Comunicaciones y Sakeenah Shabazz contribuyeron en la edición y publicación de este reporte. Stephanie Welter-Krause estuvo a cargo del diseño. Los servicios de traducción al español fueron proporcionados por la Universidad de California Agricultura y Recursos Naturales.

Introducción

En el 2012, la organización no lucrativa *Center for Community Action and Environmental Justice* (Centro para una Acción Comunitaria y Justicia Medioambiental), CCAEJ, por sus siglas en inglés, demandó a la ciudad de Jurupa Valley, California, en contra de una propuesta para construir un depósito y centro de distribución cerca de un vecindario de bajos ingresos. De acuerdo con el CCAEJ, el sitio industrial hubiera sido un ejemplo del problema histórico y persistente de discriminación en la planeación sobre el uso de la tierra en todo los Estados Unidos. Durante décadas las decisiones sobre zonificación y emplazamiento han expuesto a los vecindarios de bajos recursos y comunidades de color a peligros medioambientales de manera desproporcionada, limitando a la vez el acceso de estas comunidades a recursos como espacios verdes públicos, vivienda permanente accesible y alimentos saludables. Este patrón ha tenido un impacto medible en la salud de estas comunidades.

En Jurupa Valley, el CCAEJ no solo trabajó para detener la construcción del centro de distribución. La organización también aseguró que todos los miembros de la comunidad pudieran participar en las decisiones sobre planeación de la ciudad que pudieran afectar su salud. En el 2014, la ciudad Jurupa Valley adoptó en su Plan General el Elemento de Justicia Medioambiental de Jurupa Valley — preparado por el CCAEJ para codificar la equidad en las futuras decisiones sobre desarrollo.¹ La incorporación del tema de justicia medioambiental (EJ, por sus siglas en inglés) en la planeación sobre el uso de la tierra muy pronto se convirtió en un esfuerzo estatal. Años más tarde, el CCAEJ trabajó junto con la *Environmental Health Coalition* (Coalición de Salud del Medio Ambiente), la *California Environmental Justice Alliance* (Alianza para la Justicia del Medio Ambiente) y la senadora estatal Connie Leyva (SD 20) para elaborar la propuesta de ley del Senado *SB 1000: La Ley para la Planeación de Comunidades Saludables*.² El entonces gobernador de California, Jerry Brown, firmó la SB 1000 en septiembre del 2016, convirtiéndola en ley.³

Mientras que el proceso de planeación de las ciudades ha perpetuado históricamente las desigualdades, una creciente cantidad de literatura y promoción se ha centrado en cómo la planeación sobre el uso de la tierra podría movilizarse en favor de la justicia medioambiental⁴ y cómo integrar políticas basadas en la equidad puede converger los movimientos en favor de una justicia medioambiental y alimentaria y la equidad en la salud.⁵ Nuestra investigación sobre la SB 1000 se basa en esta literatura, con un enfoque particular en el vínculo que hay entre la justicia medioambiental en la planeación sobre el uso de la tierra y la justicia alimentaria.

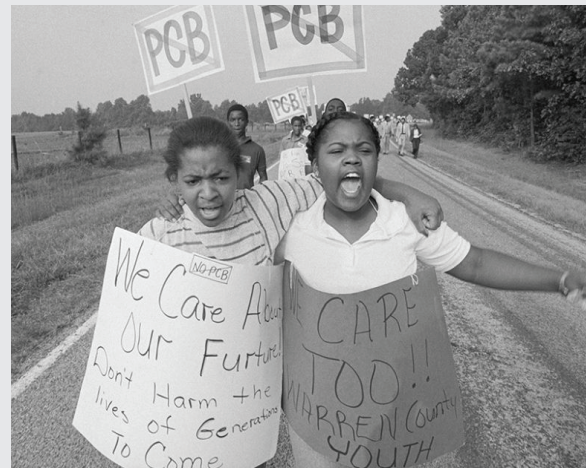
Al combinar la revisión de los documentos del Plan General, el análisis de la información cuantitativa y las entrevistas a profundidad, le dimos seguimiento a la implementación y cumplimiento de la SB 1000. También determinamos con qué amplitud las ciudades y condados han integrado las políticas que impulsan la justicia alimentaria. Basado en este análisis, este reporte pone énfasis en la importancia de señalar de manera explícita las inequidades alimentarias en la planeación sobre el uso de tierras de EJ y ofrece recomendaciones a los planificadores urbanos y legisladores estatales para mejorar la implementación de la SB 1000 para darle mayor impulso a los objetivos de la ley en favor de los objetivos de la justicia alimentaria.

Fotografía de la portada: Vista general de Gilroy, CA. iStock.com/Derek_Neumann..

Justicia alimentaria y medioambiental: dos movimientos que se superponen

Vistos con frecuencia como movimientos sociales distintos, la justicia alimentaria y del medio ambiente están profundamente entrelazadas, con raíces en los derechos de equidad y civiles. El movimiento de EJ se desencadenó en el condado de Warren, Carolina del Norte, donde una comunidad negra rural peleó contra la creación de un vertedero de basura tóxica en 1982.⁶ Esta lucha representó una creciente conciencia sobre un emplazamiento injusto en el uso indeseable de la tierra en las comunidades de color, como lo documentó el sociólogo Robert Bullard durante la década de los setentas.⁷ En ese tiempo, grupos como los Black Panthers (Panteras Negras) habían considerado los derechos de seguridad alimentaria como parte de la lucha por los derechos civiles al liderar programas de alimentos en sus comunidades. Hoy en día, el movimiento de justicia alimentaria abarca la soberanía alimentaria, nutrición y acceso a los alimentos, con un enfoque específico en equidad racial.⁸

En su artículo de 1996 “*First Feed the Face: Environmental Justice and Community Food Security*”, Robert Gottlieb y Andrew Fisher argumentan que los alimentos son esenciales para el movimiento de justicia medioambiental.⁹ Nuestra investigación hace énfasis en este argumento: conforme las ciudades y condados incorporan la EJ en la planeación sobre el uso de la tierra, la SB 1000 ofrece una importante vía para impulsar la justicia alimentaria en todo el estado.



Residentes del condado de Warren en Carolina del Norte dieron inicio al movimiento EJ al protestar contra un vertedero de basura PCB entre 1978 a 1982. Fotografía cortesía de la Jerome Friar Photographic Collection and Related Materials, Wilson Special Collections Library, UNC-Chapel Hill.

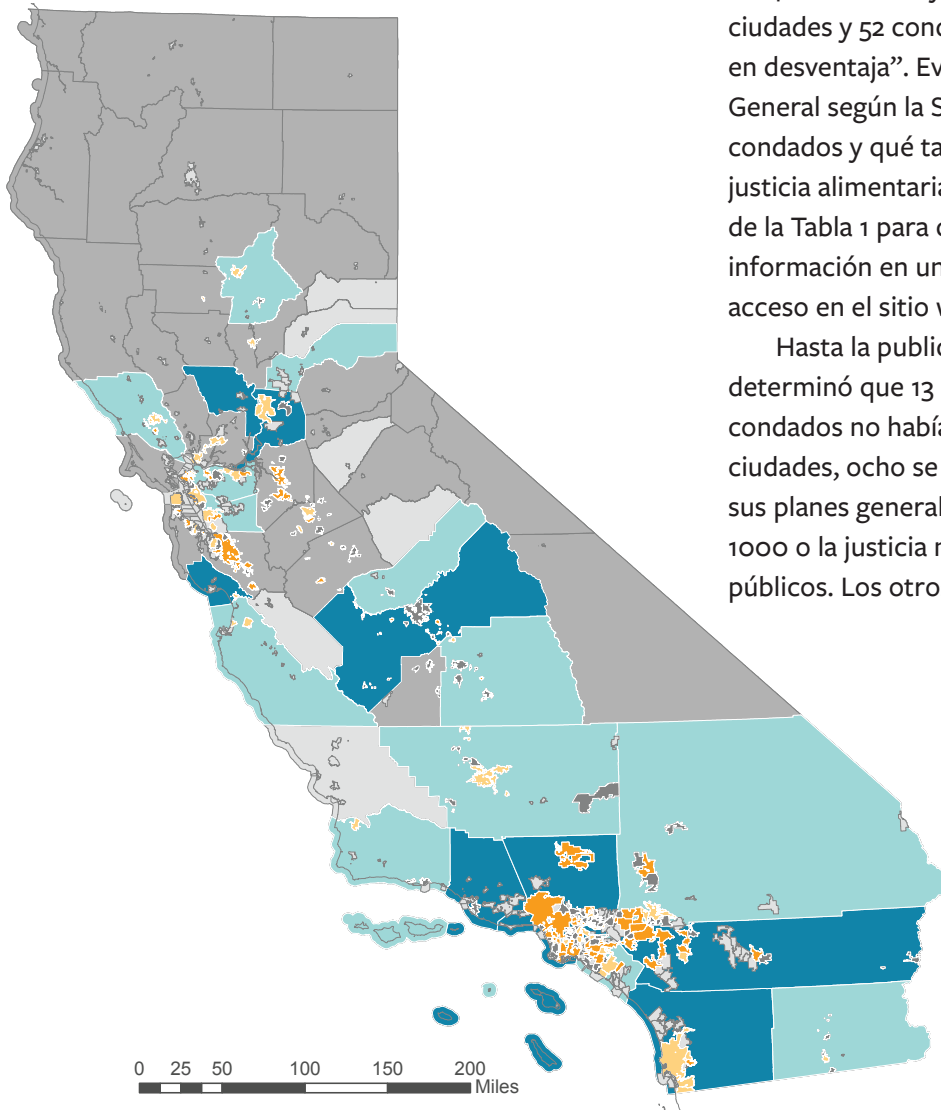
¿Qué es la SB 1000?

En California, la ley estatal requiere que cada ciudad y condado cuenten con un Plan General que sirva como documento modelo para el futuro desarrollo del municipio.¹⁰ Estos planes incluyen políticas, objetivos, principios, propuestas de planes y mapas organizados en “elementos,” los cuales son los temas que la ley de California requiere que abarque cada Plan General.¹¹ Los elementos incluyen vivienda, espacios abiertos, seguridad, etc. En California, los planes generales son típicamente actualizados cada 15 a 20 años.

SB 1000: The Planning for Healthy Communities Act (Ley para la planeación de comunidades saludables) entró en efecto el 1 de enero del 2018. La misma requiere que las ciudades y condados con “comunidades desventajadas” incorporen el tema de la justicia medioambiental en sus planes generales, ya sea como un elemento único o integrado en las políticas a lo largo del plan. La ley se activa en estas localidades cuando los urbanistas actualizan dos o más elementos del Plan General a la vez.

En el caso de la SB 1000, las “comunidades en desventaja” o DAC, por sus siglas en inglés, son definidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California (CalEPA, por sus siglas en inglés) a través de su CalEnviroScreen 4.0, una herramienta que examina las zonas censales con respecto a sus cargas de contaminación y otras características poblacionales.¹² Notablemente, la raza no es uno de los indicadores de la CalEPA — lo cual ilustra los límites del término “comunidades en desventaja” para describir la histórica discriminación a la que se enfrentan muchas comunidades en California.¹³ Un análisis separado de la *California Office of Environmental Health and Hazard Assessment* muestra que las personas de color, especialmente las poblaciones negras y latinas, tienen mayores probabilidades de vivir en una DAC.¹⁴ En este reporte, continuamos usando el término “comunidades en desventaja” como se escribe en la SB 1000, sin embargo, apoyamos una reconsideración estatal de dicha nomenclatura.

GRÁFICA 1. MAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SB 1000



- Ciudades que han implementado la SB 1000
- En curso de implementar la SB 1000 (por ciudades)
- Ciudades que necesitan implementar la SB 1000
- Condados que han implementado la SB 1000
- En curso de implementar la SB 1000 (por condados)
- Condados que necesitan implementar la SB 1000
- Tramos del Censo que no tienen comunidades en desventaja

Seguimiento de la SB 1000

De 482 ciudades y 58 condados en California, 228 ciudades y 52 condados incluyen el tema de “comunidades en desventaja”. Evaluamos el cumplimiento del Plan General según la SB 1000 de cada una de estas ciudades y condados y qué tan efectivo fue cada plan en promover la justicia alimentaria. Para hacerlo, llenamos la información de la Tabla 1 para cada Plan General y compilamos esta información en un banco de datos al que se puede tener acceso en el sitio web del *Berkeley Food Institute*.

Hasta la publicación de este reporte, nuestro análisis determinó que 13 de las 228 ciudades y cinco de los 52 condados no habían cumplido con la SB 1000. De las 13 ciudades, ocho se encuentran en proceso de actualizar sus planes generales, pero no han mencionado la SB 1000 o la justicia medioambiental en documentos públicos. Los otros cinco ciudades y cinco condados

GRÁFICA 2. LA IMPLEMENACIÓN DE LA SB 1000 EN CIUDADES DE CALIFORNIA

De las **228** ciudades con “comunidades en desventaja”

Cinco ciudades no han cumplido con la SB 1000

Ocho ciudades actualizan sus planes generales, pero su cumplimiento de la SB 1000 no está claro

55 ciudades están en proceso de implementación de la SB 1000

66 ciudades han implementado la SB 1000

94 ciudades no han sido activadas aun por la SB 1000

GRÁFICA 3. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA SB 1000

Columna	Significado
Ubicación	Nombre del municipio en California
Condado	Nombre del condado en el que se ubica el municipio
Actualización más reciente	Fecha en la que se actualizó por última vez el Plan General o si se encuentra en proceso
Enlace al plan	Enlace al Plan General
SB 1000	<p>¿Ha abordado el Plan General los requisitos de la SB 1000?</p> <p>Si: la SB 1000 está incluida en el Plan General</p> <p>No: la SB 1000 no está incluida en el Plan General a pesar de que la ley ya entró en efecto</p> <p>En curso: el municipio está trabajando en la actualización del Plan General.</p> <p>La ley no se ha activado: la ciudad no ha actualizado dos o más elementos de su Plan General simultáneamente desde que la SB 1000 entró en efecto</p> <p>No se ha mencionado: el municipio está trabajando en la actualización del Plan General, pero no se menciona la SB 1000 en los documentos de planificación.</p>
El elemento EJ	<p>¿Existe un elemento de EJ o se incorpora la justicia medioambiental en todo el documento?</p> <p>Sí: existe un elemento independiente sobre la EJ</p> <p>Incorporado en todo: las políticas de EJ están integradas en todo el Plan General.</p> <p>N/A: la necesidad de implementar el elemento de EJ no ha sido activada</p> <p>Poco claro: la actualización está en curso. Esto puede significar que no está claro si se van a incorporar las políticas a lo largo o como un elemento independiente, o si se va a incorporar la EJ de alguna manera</p>
Cumplimiento	<p>¿Cumple la ciudad con la SB 1000?</p> <p>Si: la ley no se ha activado, las políticas de EJ están en curso o ya existen</p> <p>No: la ciudad no está cumpliendo con la SB 1000 (dos o más elementos han sido actualizados al mismo tiempo desde que la SB 1000 entró en efecto)</p> <p>Poco claro: la ciudad está actualizando el Plan General, pero no se menciona la SB 1000 en la información actualizada que se ha publicado.</p>
¿Comunidad agrícola?	¿Mantiene el municipio un fuerte lazo con la producción agrícola?

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA

Columna	Significado
Política	Nombre de la política tal como aparece en el Plan General
Descripción	Descripción de la política tal como aparece en el Plan General
Acceso a los alimentos	¿Aborda la política del acceso a los alimentos?
Resultados en materia de nutrición	¿Aborda la política los resultados en materia de nutrición?
Producción de alimentos local	¿Promueve la política la producción local de alimentos?
Jardines comestibles	¿Promueve o permite la política los jardines comestibles (árboles frutales, huertos comunitarios)?
Protección de las tierras agrícolas	¿Protege la política las tierras agrícolas existentes?
Aborda la equidad	¿Aborda la política directamente el tema de equidad (tanto la política individual y en general)?
Aborda los objetivos de la política	¿De los seis objetivos identificados, cuántos se lograron?

Fuente: esta gráfica representa la forma en la que analizamos cada Plan General para construir nuestra base de datos. Seguimos los planes generales para el cumplimiento y las políticas alimentarias integrales. Para leer la base de datos visite food.berkeley.edu/mission/policy/sb-1000

Nuestro análisis determinó que las políticas sobre justicia alimentaria más efectivas e integrales son las que están dirigidas específicamente a las comunidades en desventaja, ofrecen pasos prácticos y se enfocan en resultados medibles. Algunos ejemplos:

Richmond–

“Aprovechar los incentivos financieros, la zonificación y la asistencia técnica y otros programas similares para atraer (super)mercados a las áreas residenciales desatendidas de la ciudad. Actualizar periódicamente la información sobre la ubicación de fuentes de alimentos saludables con el fin de rastrear el progreso sobre la obtención de objetivos de este elemento y el Elemento de Salud y Bienestar Comunitarios”.

San Pablo–

“Buscar las formas de colaborar con la agricultura regional Apoyada por la Comunidad (CSA, por sus siglas en inglés) como una fuente alternativa de frutas y verduras frescas y saludables para los residentes de San Pablo, particularmente aquellos con una movilidad limitada, ingresos limitados y los más alejados de supermercados existentes”.

Anaheim–

“Apoyar los establecimientos de mercados de granjeros, puestos de granjeros, mercados del vecindario, mercados móviles de alimentos saludables y otras tiendas que vendan alimentos saludables y productos frescos y el acceso a opciones de alimentos saludables en toda la ciudad, con un enfoque en ubicaciones a las que se puede llegar caminando (a una distancia de media o un cuarto de milla) desde las comunidades EJ”.

no han incorporado el tema de justicia medioambiental a pesar de haber actualizado dos o más elementos simultáneamente desde el 2018. El resto de las ciudades y condados ya han adoptado nuevos elementos en cumplimiento con la SB 1000, han iniciado el proceso de implementación de las políticas de EJ o no han tenido aún la necesidad de implementar la SB 1000.

La mayoría de ciudades y condados cumplen con el mínimo de requisitos de la SB 1000. Sin embargo, la medida en la que estos planes generales abordan de manera integral la justicia alimentaria varía significativamente en las diferentes ciudades y condados. En nuestro análisis, identificamos cada Plan General que contiene políticas alimentarias y evaluamos la forma en la que la política aborda seis objetivos sobre política alimentaria: acceso a los alimentos, resultados nutricionales, producción local de alimentos, jardines comestibles, protección de las tierras agrícolas y equidad. Determinamos que un Plan General que aborda a fondo por lo menos cuatro de estos seis objetivos (con equidad como requisito) cumple de manera integral los objetivos de la justicia alimentaria de la SB 1000. En base a esta definición, 51 ciudades y 12 condados han cumplido con la SB 1000 y abordado de manera integral el tema de la justicia alimentaria en sus planes generales. Una ciudad cuenta con políticas alimentarias integrales, pero no cumple todavía con la SB 1000.

En el caso de todos los objetivos para políticas alimentarias, con excepción de protección de tierras

GRÁFICA 4. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN LOS PLANES GENERALES E IMPLEMENTACIÓN DE LA SB 1000

Objetivo de la política que ha sido abordado	# total de ciudades que han implementado la SB 1000	Ciudades con un objetivo que no han implementado la SB 1000	% del total (n=163)	Ciudades con un objetivo que han implementado la SB 1000	% del total (n=65)	Diferencia entre el % con o sin SB 1000	Puntuación Z	Valor P
Acceso a alimentos	111	52	31.9%	59	90.8%	+58.9%	8.03299	<.00001*
Nutrición	92	37	22.7%	55	84.6%	+61.9%	8.6011	<.00001*
Producción de alimentos	119	63	38.6%	56	86.1%	+47.5%	6.4819	<.00001*
Jardines comestibles	61	25	15.3%	36	55.4%	+40.1%	6.1767	<.00001*
Tierras agrícolas	95	73	44.7%	22	33.8%	-11.0%	-1.5075	0.13167
Equidad	80	26	16.0%	54	83.1%	+67.1%	9.69	<.00001*

*Statistically significant at p<0.01.

agrícolas, la SB 1000 ha incrementado claramente la frecuencia con la que aparecen en los planes generales (ver la Gráfica 4). Los planes generales en áreas rurales típicamente ya contienen políticas que preservan la tierra agrícola, mientras que las áreas urbanas no priorizan las tierras agrícolas sobre la competencia por el uso de la tierra. La producción de alimentos es típicamente percibida como un uso de tierra rural, aun cuando los estudios resaltan las granjas urbanas como espacios

importantes para la salud comunitaria y el acceso a alimentos.¹⁵ Mientras tanto, las políticas alimentarias que abordan la equidad han visto el incremento más significativo desde que la SB 1000 entró en efecto — ocurriendo un 67 por ciento con mayor frecuencia en los planes generales que han incorporado la SB 1000. Esto ilustra la importancia de las políticas que hacen de la equidad una prioridad explícita en la planificación.

Estudios de casos prácticos

Para complementar la información en la base de datos, llevamos a cabo estudios de casos en las ciudades de Richmond y Gilroy, las cuales incorporaron políticas alimentarias integrales y centradas en la equidad en sus planes generales. Estos estudios ilustran cómo la implementación de la SB 1000 podría diferir entre un municipio urbano (Richmond) y uno rural (Gilroy). En cada ciudad, entrevistamos a planificadores, legisladores y promotores comunitarios para entender la creación de la política, la participación comunitaria y el proceso de implementación detrás de cada elemento EJ de la ciudad.

Gilroy

Conocida por su festival anual del ajo, la ciudad de Gilroy es una comunidad agrícola del condado de Santa Clara, en el extremo sur del área de la Bahía de San Francisco, con una población de cerca de 60 mil habitantes. La ciudad es en su mayoría latinx, con inclinación demócrata y cuenta con por lo menos una comunidad desventajada.¹⁶ El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos designa una parte de la ciudad como zona de bajos ingresos y acceso escaso a alimentos, lo cual significa que una mayoría de los residentes en esta área viven a más de una milla de distancia de un supermercado.¹⁷ Con la ayuda de la firma Mintier Harnish asesora en planeación y desarrollo con base en Sacramento, Gilroy fue una de las primeras ciudades en el estado en adoptar exitosamente el elemento EJ tras la aprobación de la SB 1000.¹⁸

Al inicio del proceso de planeación, Mintier Harnish organizó un grupo de discusión y talleres con miembros de la comunidad de Gilroy para hablar sobre la SB 1000 en el Plan General municipal. El acceso a los alimentos pronto se convirtió en el tema central de estas discusiones. “Uno de los planificadores [tenía una] pasión [por] los alimentos orientados a la salud comunitaria. [Nosotros] tuvimos la libertad de perseguir esos intereses en nuestro



El antiguo Ayuntamiento de Gilroy. Cortesía de la Jon B. Lovelace Collection of California Photographs, Library of Congress.

trabajo”, dijo el asesor de Mintier Harnish. Miembros de la organización local Nueva Vida, la cual opera la recolección de alimentos bimensualmente en San Ysidro Park, también se hicieron oír sobre problemas de alimentos durante el proceso de planeación. Ellos expresaron un interés particular en políticas que distribuyan productos orgánicos locales a los residentes de Gilroy.

Nuestras entrevistas en Gilroy revelaron que la divulgación y educación del público fueron componentes significativos en el proceso de planeación. Nueva Vida, junto con Iglesias locales y otros miembros de la comunidad, distribuyeron volantes en inglés y español y fueron puerta por puerta para ofrecer una visión sobre el proceso de planeación en torno a la SB 1000. Sin embargo, la participación comunitaria cesó una vez que se llevó a cabo la actualización del Plan General — quizás debido a la rotación de personal en el gobierno municipal. La ciudad no informó a Mintier Harnish ni a Nueva Vida cuando se finalizó y adoptó el elemento EJ.

Richmond

En la parte noreste de la Bahía de San Francisco en el condado de Contra Costa, Richmond cuenta con una larga historia en la planeación sobre el uso de tierras industriales que ha dejado problemas medioambientales a sus residentes. La ciudad se hizo famosa como importante astillero de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el mayor empleador de Richmond es la refinería Chevron Richmond, la cual procesa 245 mil barriles de petróleo por día.¹⁹ La mitad de la población de 115 mil habitantes es latinx y el resto se distribuye por igual entre residentes blancos no hispanos, negros y asiáticos.²⁰ Similar a Gilroy, la USDA designa porciones de la ciudad como áreas de bajos ingresos y acceso reducido a alimentos.

En el 2012, el concilio municipal de Richmond publicó un Plan General que incluía un elemento de Salud y Bienestar el cual incorpora el tema de justicia medioambiental.²¹ En octubre del 2022, Richmond se basó en este elemento para modificar su plan con un elemento de EJ.²² Como parte de nuestra investigación, hablamos con un planificador que trabajó en el elemento de Salud y Bienestar en el 2012, un miembro de la División de Planeación de la ciudad, un integrante actual del concejo municipal y un representante de la organización no lucrativa *Planting Justice*.

La respuesta a nuestra invitación a participar en Richmond ha sido limitada, por lo que se requieren más entrevistas para entender el alcance total de la implementación de la SB 1000 en la ciudad. Sin embargo, un tema que surgió de nuestra entrevista fue el escepticismo con respecto al papel de planeación municipal sobre el medio ambiente y la justicia alimentaria. “Simplemente no confío que la energía, capacidad y tiempo que le dediquemos a la planeación haga mucha diferencia”, mencionó uno de los entrevistados. “Es muy agotador y no parece tener una relación muy directa con lo que ocurre en el terreno”.



Vista general de Richmond, CA. iStock.com/MattGush

Recomendaciones sobre la política

Nuestra base de datos muestra que la SB 1000 ejerció un peso legislativo detrás de la incorporación de políticas medioambientales y de justicia alimentaria en la planeación municipal. Sin embargo, la brecha entre el cumplimiento de la SB 1000 y las políticas sobre justicia alimentaria integrales, así como la visión que nos dieron nuestros estudios de casos, resalta la necesidad de mejorar la implementación de la SB 1000 con el fin de seguir impulsando el tema de la justicia alimentaria en el proceso de planificación. Ofrecemos las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para los planificadores municipales y de condados

1 Implementar un elemento de justicia medioambiental independiente en lugar de incorporar objetivos para una justicia medioambiental a lo largo del Plan General.

Nuestra investigación muestra que las ciudades y condados tienden más a abordar la justicia alimentaria en sus planes generales de manera integral si la justicia medioambiental se implementa como un elemento independiente, en lugar de incorporarlo a lo largo del plan. Aun si la EJ se esparce a lo largo, los planes generales deberían incluirla por sí sola en un espacio de fácil referencia.

2 Concientizar y hacer partícipe al público en la elaboración de los objetivos de justicia medioambiental, y comunicar dichos objetivos al público.

Muchos de nuestros entrevistados en Gilroy y Richmond, que trabajan en la industria de los alimentos o el gobierno municipal conocían vagamente la SB 1000 y desconocían cuáles políticas había adoptado su ciudad. Las ciudades y condados deben incluir una participación amplia para crear los objetivos de la justicia medioambiental en sus planes generales. Los objetivos finales deberían ser comunicados a los miembros de la comunidad y organizaciones, especialmente aquellos que participaron en el proceso de planeación.

3 Mejorar el seguimiento y la aplicación en el terreno de los objetivos fijados.

Un Plan General sirve como un plan de acción del municipio, pero nuestro análisis mostró una falta de incentivos y responsabilidad para convertir estos planes en realidad. Este problema no es específico de la SB 1000, sino aplica de manera más general a los planes generales. Los objetivos del Plan General serían más efectivos si se asignaran fondos a estas políticas o se aseguraran más recursos para su implementación.

4 Escribir políticas sobre justicia alimentaria que sean más segmentadas, accionables y específicas.

Nuestro análisis encontró que las mejores políticas sobre justicia alimentaria estuvieron dirigidas a comunidades en desventaja, especificaban un plan para lograr esos objetivos, y llevaban a cambios específicos y medibles.

5 Priorizar la igualdad racial en la planeación medioambiental y justicia alimentaria, a pesar de que CalEnviroScreen no incluye la raza en su análisis de las comunidades desventajadas.

Las ciudades y condados deberían explícitamente abordar el legado de la discriminación racial en la planeación sobre el uso de las tierras en su localidad. Los municipios deberían asegurar que las comunidades de color tengan voz en las decisiones que afecten su salud. Deberían asignarse recursos e inversiones equitativamente para apoyar iniciativas dirigidas por la comunidad que aborden injusticias medioambientales. Si las ciudades no se centran específicamente en la igualdad racial en sus planes generales, la planeación perpetuará las desigualdades existentes.

Recomendaciones para el estado California

6 Incluir la métrica del acceso a los alimentos de la USDA cuando se define “comunidades desventajadas”.

El acceso a los alimentos no es un criterio incluido en el cálculo de CalEPA’s CalEnviroScreen sobre comunidades desventajadas. Puede ser que algunas ciudades o condados no tengan un problema medioambiental documentado y por lo tanto no se les requiera implementar la SB 1000, pero puede ser que cuenten con comunidades que presentan inseguridad alimentaria. Nuestra base de datos muestra a 130 ciudades que deberían implementar la SB 1000 que contienen una mayoría de hogares ubicados a más de una milla de distancia (o diez millas en áreas rurales) de un supermercado. Sin embargo, al superponer datos del CalEnviroScreen con el USDA’s Food Access Research Atlas (Atlas de la Investigación sobre el Acceso a Alimentos de USDA) identificamos 98 ciudades adicionales que no tendrían que implementar la SB 1000, pero que incluyen comunidades de bajos recursos con problemas de acceso a alimentos. Si se expandiera la CalEnviroScreen para tener en cuenta el acceso a los alimentos, ello ampliaría el impacto de la SB 1000 en estas comunidades.

7 Aclarar la designación de CalEPA de las comunidades tribales como “desventajadas” en la SB 1000 para incrementar su cumplimiento en condados con tribus reconocidas federalmente.

Desde el 2022, CalEPA considera las tierras bajo el control de tribus reconocidas federalmente en el estado como “desventajadas” a efectos de leyes como la SB 1000.²³ Mientras tanto, los cinco condados que no han cumplido contienen comunidades indígenas en lugar de DAC señaladas por CalEnviroScreen, lo cual indica una falta de claridad o concientización de que estos condados requieren implementar la SB 1000. Sugerimos que clarifiquen la inclusión de condados con comunidades tribales bajo la ley y que lleven a cabo una difusión orientada a los departamentos de planeación de estos condados.

Conclusión

La planeación municipal y las políticas como la SB 1000 juegan un papel esencial en la promoción de la justicia alimentaria. Al requerir a las ciudades y condados que incorporen el tema de la justicia medioambiental en sus planes generales, la SB 1000 puede allanar el camino para políticas que reduzcan las inequidades y potencialmente hagan lo mismo con las disparidades en la salud. Para la siguiente fase de nuestra investigación, intentaremos conectar el acceso a los alimentos y los indicadores de salud relacionados a la alimentación con la implementación de la SB 1000.

En este reporte, mostramos algunos de los éxitos de la SB 1000. La ley funciona para incluir explícitamente la equidad en los objetivos y políticas para llevar a los miembros de la comunidad a la mesa y conectar la justicia medioambiental y la alimentaria, dos movimientos separados pero que se superponen, durante todo el proceso de planeación de la ciudad. Ya nos hemos reunido con la Oficina del Gobernador para Planeación e Investigación y la Oficina de Justicia Medioambiental del Procurador General (creada en el 2018 después de la aprobación de la SB 1000) para recomendar mejores prácticas para políticas de acceso a alimentos y discutir cómo lograr que todas las ciudades y condados afectadas por la SB 1000 cumplan con la misma. En septiembre del 2023, la Oficina del Procurador General publicó una guía de mejores prácticas para la implementación de la SB 1000, la cual incluye ejemplos de políticas y otros recursos para los gobiernos locales.²⁴

Nuestra investigación también muestra algunos de los límites de la SB 1000 y del proceso de planeación de la ciudad. La planeación en busca de una justicia alimentaria es el primer paso. Con la participación de la comunidad, los planes generales pueden utilizarse como herramientas para una transformación, especialmente, para comunidades vulnerables,

de primera línea e impactadas que siempre han luchado por una justicia medioambiental y alimentaria dentro y fuera del proceso de planeación de la ciudad.

La SB 1000 en sí fue impulsada por grupos comunitarios y activistas, lo que indica el importante papel que el activismo comunitario juega en impulsar políticas que promuevan la justicia medioambiental y alimentaria. La planeación municipal funciona mejor con la participación comunitaria. Un Plan General sirve como el plan de acción para una ciudad o condado. Si los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de participar en el proceso de planeación e incluir sus objetivos sobre EJ escritos en estos planes, entonces un Plan General puede también servir como el punto de contacto para la movilización popular.

Notas

- 1 “Jurupa Valley Environmental Justice Element.” Civic Solutions. Accessed April 27, 2023. civicsolutions.com/our-work/environmental-justice-element-for-jurupa-valley/.
- 2 Eng, Tiffany, Beth Spitler, and Beth Smoker. “SB 1000: Environmental Justice & Food Access in Planning, Lessons from the Sacramento Food Policy Council.” Webinar presented at the California Food and Farming Network, May 29, 2019.
- 3 “Environmental Justice in Local Land Use Planning.” Office of the Attorney General. Accessed Sept. 18, 2023. oag.ca.gov/environment/sb1000.
- 4 Arnold, Craig. “Fair and Healthy Land Use: Environmental Justice and Planning.” *Planning Advisory Service Report*, no. 549. American Planning Association, Nov. 8, 2007.
- 5 Brinkley, Catherine, and Jenny Wagner. “Who Is Planning for Environmental Justice—and How?” *Journal of the American Planning Association*, vol. 0, no. 0, Nov. 21, 2022, pp. 1–14. doi.org/10.1080/01944363.2022.2118155.
- 6 Skelton, Renee, and Vernice Miller. “The Environmental Justice Movement.” Natural Resources Defense Council, August 22, 2023. www.nrdc.org/stories/environmental-justice-movement
- 7 Bullard, Robert D. *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. Westview Press, 1990.
- 8 Chen, Wei-ting, Megan L. Clayton, and Anne Palmer. “Community Food Security in the United States: A Survey of the Scientific Literature.” John Hopkins Center for a Livable Future, April 1, 2015.
- 9 Gottlieb, Robert, and Andrew Fisher. “‘First Feed the Face’: Environmental Justice and Community Food Security.” *Antipode*, vol. 28, no. 2, April 1996, pp.193–203. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1996.tb00522.x>.
- 10 “General Plan Information.” Governor’s Office of Planning and Research. Accessed Sept. 18, 2023. <https://opr.ca.gov/planning/general-plan/>
- 11 “General Plan Guidelines and Technical Advisories.” Governor’s Office of Planning and Research. Accessed Sept. 18, 2023. opr.ca.gov/planning/general-plan/guidelines.html
- 12 “CalEnviroScreen 4.0.” OEHHA. Accessed Sept. 18, 2023. oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-40
- 13 Haaland, Oceana, and Pablo Ortiz. “Disadvantaged Communities Nomenclature Within the State of California: Findings and Conclusions — A Recommendation Document.” California Department of Water Resources, July 2022.
- 14 “Analysis of Race/Ethnicity and CalEnviroScreen 4.0 Scores.” OEHHA, October 2021.
- 15 Siegner, Alana, Charisma Acey, and Jennifer Sowerwine. “Urban Agroecology: An Essential Resource for Times of Crisis and Beyond.” Berkeley Food Institute, April 29, 2021.
- 16 “QuickFacts: Gilroy city, California.” United States Census Bureau. Accessed April 27, 2023. www.census.gov/quickfacts/fact/table/gilroycitycalifornia/PST045222.
- 17 “Food Access Research Atlas.” Economic Research Service, US Department of Agriculture. Last updated July 10, 2023. Accessed Sept. 14, 2023. www.ers.usda.gov/data-products/food-access-research-atlas/.
- 18 “2040 General Plan.” City of Gilroy, Nov. 2, 2020.
- 19 “California’s Oil Refineries.” California Energy Commission. Accessed Sept. 6, 2023. www.energy.ca.gov/data-reports/energy-almanac/californias-petroleum-market/californias-oil-refineries.
- 20 “City Facts.” Community Development Department, City of Richmond. Last updated: Aug. 31, 2023.
- 21 “Richmond General Plan 2030.” City of Richmond, April 25, 2012.
- 22 “General Plan Updates: Housing Element, Environmental Justice Element, and Amendments to the Public Safety & Noise Element.” City of Richmond, prepared by Dyett & Bhatia. Dec. 12, 2022.
- 23 “SB 535 Disadvantaged Communities.” OEHHA. Accessed Sept. 18, 2023. oehha.ca.gov/calenviroscreen/sb535.
- 24 “Best Practices for Implementing SB 1000.” Office of the Attorney General, California Department of Justice. September 15, 2023. oag.ca.gov/system/files/media/sb-1000-best-practices-en.pdf.

The Berkeley Food Institute (BFI) at University of California, Berkeley leverages University of California resources in partnership with communities to shape a just farm and food system. BFI envisions a farm and food system rooted in urban and rural agroecology, good food access, fair and healthy jobs, and racial equity.

